

legales fundamentos, la sentencia del Juez de Distrito de Zacatecas que concedió el amparo á los quejosos.

Devuélvase estas actuaciones al Juez de Distrito que las elevó á revision, acompañándole testimonio de esta sentencia para los efectos consiguientes, y diciéndole respecto del incidente sobre la multa impuesta á los solicitantes por infraccion de la ley de papel sellado, que esta Corte no se considera autorizada para resolverlo de una manera definitiva en Tribunal pleno, y que en consecuencia, obre conforme á derecho, bajo su responsabilidad.

Así por unanimidad de votos lo decretaron los CC. Presidente y Magistrados de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, y firmaron.—*José María Iglesias.*—*Miguel Auza.*—*José María Lozano.*—*José Arteaga.*—*Ignacio Ramírez.*—*Manuel de Castañeda y Nájera.*—*Ignacio María Altamirano.*—*Simon Guzman.*—*L. Velasquez.*—*M. Zavala.*—*Enrique Landa*, secretario.

Es copia que certifico. México, Agosto .... de 1874.—*Enrique Landa.*

## CIVIL.

*Autos promovidos por D. Domingo Villaverde y Lic. D. Rafael Herrera, ambos de México, sobre denuncia de un capital.*

*Sentencia del O. Juez de Distrito.*

México, Setiembre 13 de 1872.—Vistos, en artículo: Considerando, que de la declaracion del Sr. D. Joaquin Primo de Rivera de fojas 8 vuelta, aparece que obra en su poder el testamento de D<sup>a</sup> Felipa Ordáz de Corbera, y que estaba conforme con entregarlo, lo que ofreció hacer y no ha verificado, á pesar de las diversas prevenciones que al efecto se han dictado por el Juzgado. Considerando: que segun declaracion

del defensor fiscal de fojas 7, los autos relativos de la testamentaria de D. Antonio Corbera y D<sup>a</sup> Felipa Ordáz de Corbera, obran en poder del Lic. D. Joaquin Primo de Rivera; autos que por su naturaleza, deben existir en el archivo correspondiente; que siendo indudable el derecho del fisco para solicitar de los archivos los datos que necesite, no se enerva este con mayoría de razon, por que esos datos obren indebidamente en poder de particulares. Considerando: que no consta estén terminadas las testamentarias de que se trata, y aun estándolo, la responsabilidad de ellas á los pagos é impuestos que decretan las leyes y obligaciones que reporten los bienes, no por eso terminan, sino que pasan á los representantes legítimos de los derechos, á percibir los capitales de los bienes responsables, y exigirlos de sus administradores los dueños; que en el presente caso, el representante de los derechos al capital denunciado puede serlo el fisco, y á reserva de determinar en lo principal de la denuncia para hacerlo, es indispensable tener á la vista los autos en cuestion.

Por lo expuesto, prevengase al Lic. D. Joaquin Primo de Rivera, entregue en este Juzgado dentro de tercero, dia los autos de las testamentarias de D. Antonio Corbera y D<sup>a</sup> Felipa Ordáz de Corbera; apercibido de procederse á lo que haya lugar en derecho si no cumple.

Hágase saber; lo provoyó y firmó el C. Juez.—*Doy fé.*—*José A. Bucheli.*—*Joaquin Sanchez Gonzalez*, secretario.

### *Pedimento del C. Promotor fiscal del Tribunal de Circuito.*

El fiscal dice; que del documento fojas 2 del expediente, aparece que los CC. Rafael Herrera y Domingo Villaverde, denunciaron ante el ministerio como vacantes, los bienes pertenecientes á D. Manuel Corbera que falleció, y despues todos sus herederos

forzosos é intestados; que entre esos bienes figura un capital que con sus reditos, á mas de cuarenta mil pesos asciendo, y se reconoce en unas hacienda ubicadas en el Valle de Temascaltepec del Estado de México; y concluyen pidiendo se les admita la denuncia que hacen de esos bienes, se les conceda la parte que les designa la ley y para el resto se les admita la redencion, bajo las bases establecidas para los bienes nacionalizados; á esta solicitud recayó el 2 de Mayo de 71 el acuerdo del C. Presidente de la República, que se vé á fojas 3, y por el que el expediente formado se remitió al Juez 1º de Distrito para que con audiencia del Tesorero general, del Promotor fiscal y los denunciantes, practicara una averiguacion minuciosa, oyendo así mismo á la parte de la testamentaria, á fin de tener toda la luz posible para conocer la verdad y resolver en justicia, dando cuenta con el resultado.

De las diligencias practicadas en el Juzgado de Distrito, aparece que se ha dado audiencia no solo á los primeros denunciantes sino á los cesionarios de estos, se ha oído á la testamentaria y últimamente al promotor; pero hasta ahora no lo ha sido el Tesorero general, quien sin duda hubiera puesto en claro la verdad que se busca.

Como por otra parte no se remitió el expediente al Juez de Distrito para que resolviera, sino para que hecha la averiguacion diera cuenta para que el Gobierno lo hiciera en justicia, el que suscribe es de parecer se revoque el auto de 13 de Setiembre próximo pasado, y se devuelva el expediente al inferior para que oiga al Tesorero general de la Nación, y de cuenta con el resultado al Supremo Gobierno, como se le previene en el mencionado acuerdo.

México, Marzo 6 de 1873.—*Antonio Aguado.*

### *Sentencia del Tribunal de Circuito.*

México, Mayo 30 de 1873.—Vistos los autos promovidos por D. Domingo Villaverde y Lic. D. Rafael Herrera, ambos de esta Capital, sobre denuncia de un capital, en el artículo sobre que se declare que por estar concluida la testamentaria de Dª Felipa Ordáz de Corbera, no está obligado su albacea Lic. D. Joaquin Primo de Rivera, á exhibir el testamento de la citada Dª Felipa, ni los autos de su testamentaria, y que en cualquier otro punto que se promoviese sobre ese negocio, se le diese audiencia al apoderado del dicho Lic. Primo de Rivera; el auto de 13 de Setiembre del año próximo pasado, en que el C. Juez 1º de Distrito de esta Capital, en consideracion á que de la declaracion del Lic. D. Joaquin Primo de Rivera de fojas 8 vuelta, aparecia que obra en su poder el testamento de Dª Felipa Ordáz de Corbera, y que estaba conforme con arreglo, lo que ofreció hacer y no lo había verificado apesar de las diversas prevenciones que al efecto habia dictado el Juzgado; que segun declaracion del defensor fiscal de fojas 7, los autos relativos de las testamentarias de D. Antonio Corbera y Dª Felipa Ordáz de Corbera, obran en poder del Lic. D. Joaquin Primo de Rivera, autos que por su naturaleza debian existir en el archivo correspondiente; que siendo indudable el derecho del fisco para solicitar de los archivos los datos que necesite, no se enerva este con mayoría de razon, por que esos datos obren indebidamente en poder de particulares; que no constaba estuviesen terminadas las testamentarias de que se trata, y aun estando, la responsabilidad de ellas, á los pagos é impuestos que decretan las leyes y obligaciones que reporten los bienes, no por eso terminan, sino que pasan á los representantes legítimos de los derechos á percibir los capitales de los bienes responsables, y exigirles de sus administradores, los dueños; que en el presente caso, el representante de los

derechos al capital denunciado puede serlo el fisco, y á reserva de determinar en lo principal de la denuncia, para hacerlo, es indispensable tener á la vista los autos en cuestion, mandó se previniese al Lic. D. Joaquin Primo de Rivera, entregase en el Juzgado dentro de tercero día, los autos de las testamentarias de D. Antonio Corbera y de D<sup>a</sup> Felipa Ordáz de Corbera, apercibido de procederse á lo que hubiera lugar en derecho si no cumpliera; la apelacion que de ese auto interpuso la parte del Lic. Rivera, que le fué admitida por el de 30 de Noviembre del mismo año; lo pedido por el C. Fiscal; lo expuesto en el acto de la vista por el C. Lic. Rafael Herrera, por su propio derecho y á nombre de D. Domingo Villaverde, y por el Lic. D. Javier Cervantes á nombre del Lic. Primo de Rivera, con lo demás que se tuvo presente y ver convino. Resultando por el oficio que dirigió el C. Juez 4<sup>o</sup> de lo civil, á consecuencia del auto dictado para mejor proveer, que los de la testamentaria de la Sra. Corbera no se encuentran en su Juzgado y sí en poder del Lic. Primo de Rivera, segun las declaraciones que obran en autos y de que hace mérito el C. Juez en sus considerandos.

Por sus propios legales fundamentos se confirma la sentencia de 1<sup>a</sup> instancia pronunciada por el Juez 1<sup>o</sup> de Distrito de esta Capital, con fecha 13 de Setiembre del próximo pasado año.

Hágase saber, y con testimonio de este auto, rémitanse los de la materia al Juzgado de su origen, para los efectos legales.

Así por mayoría lo proveyeron los CC. Presidente y Magistrados que formaron la 1<sup>a</sup> Sala del Tribunal Superior de Justicia del Distrito, fungiendo como de Circuito, y firmaron.—*P. M. Rivera.*—*José M. Herrera y Zavala.*—*A. Zerecero.*—*T. D. Barroso.*—*José M. Guerrero.*—*Cirio Tagle*, secretario.

### *Pedimento del C. Fiscal de la Suprema Corte de Justicia.*

El que suscribe, encargado interinamente de la fiscalia, dice: que á consecuencia de una denuncia que á la seccion 6<sup>a</sup> del Ministerio de Hacienda hicieron los CC. Rafael Herrera y Domingo Villaverde de los bienes que pertenecian al finado D. Manuel Corbera, el C. Presidente de la República acordó en 2 de Mayo de 1871, que se remitiesen al C. Juez 1<sup>o</sup> de Distrito de esta Capital la copia de la denuncia y otros documentos, para que practicáse una averiguacion minuciosa, dando cuenta con el resultado; ese funcionario procedió á hacerla, y habiendo oido al C. Promotor del Juzgado, al Lic. Primo de Rivera, como albacea de la testamentaria de la esposa de Corbera, á otras personas y los expresados denunciantes, quienes solicitaron como punto previo al principal, la entrega por el referido albacea Lic. Rivera, de los autos testamentarios de Corbera y su esposa; determinó despues de quedar citadas las partes para la resolucion del artículo, que se previniera al Lic. Primo de Rivera entregara en el Juzgado dentro de tercero día, los autos de las testamentarias de D. Antonio Corbera y D<sup>a</sup> Felipa Ordáz de Corbera, apercibido de que se procedería á lo que hubiera lugar si no cumpliera. De este auto pronunciado el 13 de Setiembre de 1872, apeló el referido Lic. Rivera la 1<sup>a</sup> Sala del Tribunal Superior del Distrito fungiendo como de Circuito, confirmó en 30 de Mayo de 1873, por sus propios legales fundamentos la sentencia de 1<sup>a</sup> instancia Instruidas las partes de esa sentencia confirmatoria, el mencionado Lic. Rivera suplicó de ella, fundando la interposicion del recurso en que el fisco tenía interes en el negocio, y que ademas, era considerable la cantidad demandada. Sustanciado este artículo, la referida 1<sup>a</sup> Sala del Tribunal Superior, declaró por su resolucion de 4 de Agosto del mismo año, que no procedía el recurso de súplica de la sentencia de

vista, por que habiendo sido confirmada por esta la de 1ª instancia, había causado ejecutoria la de 2ª, con arreglo á lo dispuesto en el artículo 32 del decreto de 14 de Febrero de 1826. De este auto interpuso el C. Fiscal 2º del mencionado Tribunal Superior, el recurso de denegada súplica, al que se adhirió el representante del Lic. Rivera, y cuyo recurso debe calificar esta 1ª Sala.

La cuestion actual es semejante á la que se promovió en los autos seguidos en el Juzgado de Distrito de Toluca por el C. Jefe de Hacienda del Estado de México, contra el C. Lic. Jesus Coballos; y lo que el que suscribe pidió en esos autos, tiene que pedir en los presentes.

El fundamento principal del C. Fiscal 2º para demostrar la procedencia del recurso de súplica, es lo prescrito en la fraccion 3ª del artículo 1580 del Código de procedimientos civiles. En esa fraccion 3ª se dispone que tendran 3ª instancia los negocios en que se interese la Hacienda pública y las corporaciones; pero no estando declarado vigente dicho Código para los negocios de la Federacion, y teniendo esta además, respecto del punto en cuestion, una disposicion legal á que sugetar sus procedimientos, como lo es el decreto de 14 de Febrero de 1826; es fuera de toda duda que lo que previene este debe observarse, y no lo preceptuado en el relacionado Código, que ha sido dictado para que tenga aplicacion en los negocios comunes.

Por estas consideraciones, el que suscribe concluye suplicando á esta 1ª Sala se sirva confirmar el auto de la 1ª Sala del Tribunal Superior del Distrito funcionando como de Circuito, de 4 de Agosto de 1873, que declara insuplicable el pronunciado por la misma Sala en 30 de Mayo del mismo año.

México, Febrero 26 de 1874.—*García Ramírez.*

*Ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia.*

México, Mayo 30 de 1874.—Vistos en artículo sobre denegada súplica, los autos promovidos por el Lic. Primo de Rivera como albacea de Dª Felipa Ordáz de Corbora con D. Domingo Villaverde y el Lic. D. Rafael Herrera, referentes á la denuncia de un capital, á fin de que se confirme y revoque el auto pronunciado por la 1ª Sala del Tribunal Superior del Distrito funcionando como de Circuito, en 4 de Agosto próximo pasado, que declaró insuplicable la sentencia que la misma Sala dictó en 30 de Mayo del año anterior; lo pedido ante esta 1ª Sala por el Sr. Procurador general interino; oidos los informes que al tiempo de la vista del negocio produjeron el Lic. D. José M. Cervantes como patrono del Sr. Rivera, y el Lic. Rafael Herrera, por sí y como patrono de Villaverde, con todo lo demás que de autos consta, se tuvo presente y ver convino. Considerando que la sentencia de 2ª instancia es conforme de toda conformidad con la de 1ª; que por lo mismo la determinacion del artículo 32 de la ley de 14 de Febrero de 1826, es precisa y terminante para el presente caso; que segun ese artículo, la sentencia de vista ha causado ejecutoria. Que por lo mismo la interposicion de recurso de denegada súplica hecha por el C. Fiscal 2º del Tribunal Superior del Distrito Lic. Aguado, se verificó contra la disposicion expresa de la ley mencionada, y contra la práctica universal y constante de los Tribunales de la Federacion. Que no escusa esa falta las disposiciones del Código de procedimientos, exclusivamente para el Distrito y Tribunales de la Baja California, no siendo por lo mismo aplicable á negocios de un orden distinto; que de la propia manera ha procedido con notoria temeridad la parte de Rivera al seguir sustentando el expresado recurso; de conformidad con lo pedido por el Sr. Fiscal y en fundamento del artículo 32 de la ley

de 14 de Febrero de 1826, y la 8ª tit. 32 part. 3ª, sedecretar:

Primero: Que es de confirmarse y se confirma el auto pronunciado por la 1ª Sala del Tribunal Superior del Distrito fungiendo como de Circuito, en 4 de Agosto próximo pasado, que declaró insuplicable el dictado por la propia Sala en 3 de Mayo del mismo año, y por el que se confirmó el del Juez 1º de Distrito de esta Capital en 13 de Setiembre del año citado.

Segundo: se condena á la parte del Lic. Primo de Rivera, al pago de las costas legales que se hayan causado con ocasion del presente recurso.

Remítanse las actuaciones al Tribunal de su origen, con copia certificada de esta sentencia, para los efectos consiguientes.

Hágase saber, y archívese á su vez el Toca.

Así por unanimidad de votos lo decretaron los Sres. Presidente y Ministros que formaron la 1ª Sala de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, y firmaron.—*José M. Iglesias.*—*Juan J. de la Garza.*—*Ignacio M. Altamirano.*—*S. Guzman.*—*L. Velasquez.*—*Enrique Landa, secretario.*

Es copia. México, Julio 5 de 1874.—*E. Landa.*

## AMPARO

*Promovido ante el Juzgado de Distrito de Michoacan por José María Chavez, contra el Ayuntamiento de Zacapú, que ha ocupado parte de un terreno de su propiedad, con violación de la garantía consignada en el artículo 27 de la Constitución federal.*

PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

C. Juez de Distrito.

José María Chavez vecino de Zacapú, se ha presentado ante V. exponiendo en su es-

crito de 14 del que fna, que el Ayuntamiento del citado pueblo lo ha despojado de un solar de su propiedad que comprende siete varas de latitud por veinticuatro de longitud, de un horno y de una cocina, con el objeto de abrir una calle nueva que se juzga inútil, quedando á la vez cegado un pozo, y obligándosele á abandonar con su familia la casa de su propiedad. Con semejantes hechos cree violadas en su persona algunas garantías constitucionales, pero muy especialmente la que consigna el artículo 27, por lo que pide se le ampare con arreglo á la ley, y ofrezca pruebas.

La autoridad informante acredita con las actas respectivas de las sesiones del Ayuntamiento, y con una informacion testimonial de su institucion peculiar, la de que se viene tratando. Como esta materia es enteramente obvia, no hay para que estenderse sobre ella.

Respecto de la segunda cuestion, se hallan perfectamente acreditadas las condiciones del artículo constitucional, habiéndose ya fijado por autoridad competente, que es un principio de utilidad pública la mejora y progreso de las poblaciones. (Ejecutoria de la Suprema Corte de 14 de Marzo de 1871, página 300 del tomo 1º del Semanario Judicial).

En virtud de lo expuesto y con fundamento de la ley de 20 de Enero de 1869, el Promotor pide se declare: que la Justicia de la Union no ampara ni protege al C. José María Chavez, contra los actos del Ayuntamiento de Zacapú, en virtud de los cuales cree violadas en su persona las garantías constitucionales del artículo 27; y que no se le imponga la multa de la ley por su notoria insolvencia.

Morelia, Marzo 20 de 1874.—*N. Caba-  
llero.*—Una rúbrica.

Es copia que certifico. Morelia, Mayo 26 de 1874.—*Isidro Aleman.*